



**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN**  
**SALA QUINTA DE DECISION LABORAL**

Proceso:	Ordinario Laboral
Radicación:	05001-31-05-021-2018-00461-021
Demandante:	María Bertilda Romero de Jaramillo
Demandado:	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Asociación de Padres de Hogares de Bienestar Estrella de Oriente, Fundación las Golondrinas y Colpensiones
Llamada en garantía:	Seguros Generales Suramericana S.A.
Asunto:	Apelación Sentencia
Procedencia:	Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín
Ponente:	Sandra María Rojas Manrique
Temas:	Contrato realidad

**Medellín, marzo veintiocho (28) de dos mil veintitrés (2023)**

En la fecha, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, VICTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE, como magistrada ponente, procede, conforme al artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, a decidir el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la parte demandante, respecto de la sentencia proferida el 7 de diciembre de 2022, por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín, en el proceso ordinario laboral instaurado por la señora MARIA BERTILDA

ROMERO DE JARAMILLO en contra del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- ICBF, la ASOCIACIÓN DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR ESTRELLA DE ORIENTE, la FUNDACIÓN LAS GOLONDRINAS y la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, proceso en el cual fue llamado en garantía SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. Radicado 05001-31-05-021-2018-00461-01.

## **1.- ANTECEDENTES**

### **1.1.- DEMANDA**

La señora MARIA BERTILDA ROMERO DE JARAMILLO, convocó a juicio al INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF, la FUNDACIÓN LAS GOLONDRINAS, La ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR ESTRELLA DE ORIENTE y COLPENSIONES, pretendiendo se declare que la ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR ESTRELLA DE ORIENTE y la FUNDACIÓN LAS GOLONDRINAS, fungieron como simples intermediarios en el contrato laboral que vinculó a la actora con el ICBF, se declare que, entre el ICBF y la accionante existió un contrato laboral en virtud del principio de primacía de la realidad sobre las formas, el cual se extendió desde el 29 de abril de 1987 hasta el 15 de mayo de 2016; declarándose que no ostentaba la calidad de trabajadora oficial, ni de empleada pública, sino que era una servidora pública de hecho o de facto.

Consecuentemente, se condene al pago de las cesantías causadas durante toda la vigencia del contrato, al pago de los intereses a las cesantías, las vacaciones compensadas en dinero, primas, vacaciones, bonificación por recreación; primas de navidad, las prestaciones extralegales y convencionales reconocidas por el ICBF, el pago de un día de salario por día de retardo por el no pago del auxilio de las cesantías, así como por el no pago de las prestaciones al momento de la

terminación del contrato laboral o subsidiariamente, los intereses de mora según el artículo 88 de la Ley 1328 de 2009 y se condene al pago de los aportes por los riesgos de invalidez, vejez y muerte dejados de cancelar durante toda la relación laboral con destino a Colpensiones.

En respaldo de tales pedimentos, se expuso que la Asociación Padres de Hogares de Bienestar Familiar Estrella de Oriente, celebró contrato de aporte para administrar los recursos asignados para el Hogar Comunitario de Bienestar, donde prestaba servicios la actora como madre comunitaria, resaltando que la Asociación de Padres de Hogares de Bienestar Estrella de Oriente, se limitó a acatar las directrices dadas por el ICBF, que la demandante prestó servicios desde el 29 de abril de 1987 hasta el 1º de marzo de 2013, en el Hogar Comunitario Las Rositas, fecha en la cual siguió prestando servicios a través de la Fundación Las Golondrinas hasta el 15 de mayo de 2016.

Se narró que la accionante como contraprestación de su labor, únicamente recibió una beca inferior al salario mínimo y nunca percibió prestación social alguna, ni vacaciones, aduciendo que, desde que inició a prestar servicios como madre comunitaria, siempre estuvo subordinada por el ICBF. Se adujo igualmente, que la pretensora se encuentra afiliada a Colpensiones y materializó algunas cotizaciones a través del sistema subsidiado, sin que tenga todas las semanas que debería por todo el tiempo de prestación de servicio, señalándose que la demandante no ostentaba la calidad de trabajadora oficial, ni empleada pública.

## 1.2.- CONTESTACIÓN

Efectuadas las diligencias de notificación y traslado, las llamadas a juicio procedieron a replicar la demanda, en los siguientes términos:

El **Instituto Colombiano de Bienestar Familiar**, sostuvo que la entidad nunca tuvo ningún tipo de relación laboral con la demandante, ni celebró con ella

contrato de trabajo, aclarando que la relación existente entre el ICBF y la entidad administradora de servicio Estrella de Oriente, no es de subordinación, sino que es una relación contractual, que surge en virtud del contrato de aportes, que no le consta las fechas que se relacionan como extremos de la supuesta relación laboral, ni qué entidades fueron los empleadores de la accionante, desconociendo igualmente el estado y tipo de régimen de afiliación de la actora al sistema general de pensiones.

Con el fin de enervar las pretensiones, formuló las excepciones de: ausencia de relación laboral, legal o reglamentaria entre las partes; carencia de legitimación en la causa por pasiva; imposibilidad jurídica del ICBF de celebrar contratos de trabajo; cobro de lo no debido; inexistencia o falta de causa para demandar; inexistencia de la obligación; prescripción y la que denominó “del contrato laboral y la sanción moratoria”.

Igualmente, el ICBF llamó en garantía a la Aseguradora Seguros Generales Suramericana S.A., con fundamento en las pólizas 1226749-2, 1229577-6 y 1229598-0 otorgadas como garantía en los contratos de aportes No 268-2015, 335-2015 y 36 de 2015 celebrados con la Fundación las Golondrinas y las pólizas B° 0572126-3, 0453696-1 y 0690153-8, respecto de los contratos de aportes 242-2011, 029-2010 y 134-2012 celebrados con Estrella de Oriente.

Por su parte, la **Fundación las Golondrinas**, al replicar la demanda señaló que la Fundación las Golondrinas y la actora, suscribieron tres contratos laborales a término fijo, con solución de continuidad, en los cuales la Fundación las Golondrinas fue el único empleador y cumplió con el deber de aportar al sistema de seguridad social, asimismo, que no le consta lo afirmado en relación a la Asociación de Padres de Hogares de Bienestar Estrella de Oriente, ni respecto de la relación laboral que se indica sostuvo la actora con el ICBF.

En oposición a la prosperidad de las pretensiones, propone las excepciones de inexistencia de la obligación a cargo de Fundación las Golondrinas; falta de legitimación en la causa por pasiva; cobro de lo no debido; prescripción; pago total de las obligaciones por parte de Fundación las Golondrinas; buena fe y la excepción genérica.

El curador ad litem, que representó la **Asociación de Padres de Hogares de Bienestar Estrella de Oriente**, al pronunciarse frente al libelo incoativo de la demanda sostuvo no constarle los hechos, en tanto que se desconoce la prestación del servicio de la actora, siendo obligación de la parte demandante probar lo indicado. Con el fin de contrarrestar las pretensiones, presentó las excepciones de prescripción; compensación y la genérica.

A su vez, **Colpensiones** afirmó que no le constan los hechos y que no se hará tacha u objeción alguna respecto de la prestación de servicios de la actora como madre comunitaria. Se opone a las pretensiones y formula como excepciones la inexistencia de contrato de trabajo-aportes a pensión; cálculo actuarial por parte del empleador; prescripción; imposibilidad de condena en costas y compensación.

Finalmente, la sociedad llamada en garantía, **Seguros Generales Suramericana**, frente a la demanda principal indicó que no le constan los hechos y en oposición a las pretensiones propuso como excepciones las de inexistencia de relación laboral de las madres comunitarias antes de la ley 1607 de 2012; inexistencia de relación laboral de las madres comunitarias con el ICBF en la reiterada línea jurisprudencial de la Corte Constitucional y prescripción.

Respecto al llamamiento en garantía resalta que no existe un acápite de pretensiones, no obstante, si se tiene como pretensión lo manifestado en el hecho tercero del llamamiento, se opone a la misma, para lo cual formula las excepciones de ineficacia del llamamiento en garantía; inexistencia de cobertura por hechos ocurridos antes de la vigencia del amparo de salarios y prestaciones

sociales; inexistencia de cobertura por actuaciones imputables al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; sujeción a las coberturas, amparos, valores asegurados y vigencia temporal de las pólizas de cumplimiento; inexistencia de cobertura para la pretensión de aportes adeudados a la seguridad social e inexistencia de cobertura en las pólizas de responsabilidad civil extracontractual.

### **1.3.- SENTENCIA DE PRIMER GRADO.**

El Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia proferida el 7 de diciembre de 2022, absolvió a las demandadas y a la llamada en garantía de las pretensiones formuladas por la demandante María Bertilda Romero de Jaramillo, declarando probada la excepción de no acreditación de los elementos esenciales del contrato de trabajo con el ICBF y se abstuvo de imponer condena en costas.

### **1.4. RECURSO DE APELACION**

Inconforme con la decisión, la apoderada del extremo activo de la litis interpuso recurso de apelación, por considerar que se incurre en un error jurídico por parte del despacho, encontrando la decisión contraria al principio de la primacía de la realidad sobre las formas, toda vez que de los testimonios de las personas que rindieron su declaración, pese a su nivel de escolaridad, se logró desprender los elementos del contrato de trabajo, así como de las pruebas documentales aportadas.

Sostuvo que se demostró la remuneración o la retribución por la prestación directa del servicio, teniendo en cuenta que el ICBF mensualmente enviaba a su mandante las sumas correspondientes a las becas, pues de ningún otro modo si la actora no fuera madre comunitaria, se le enviaría esta remuneración, asimismo, se logró demostrar la subordinación, para lo cual se debe atender el artículo 57, numeral 1 del Código Sustantivo del Trabajo.

Refirió que adicional a las becas, a la demandante se le entregaban los insumos necesarios para que pudiera atender a los niños, brindarles la alimentación, también la testigo Ninfa Usuga informa que enviaban una minuta y se le indicaba a la demandante cómo debía distribuir los alimentos, lo que se constituye en una orden o directriz tácita, siendo claras las testigos y la demandante en mencionar que cada 15 días o cada mes, el ICBF hacía vigilancia, situación que determina la subordinación.

Expuso que dentro de las funciones del ICBF, está la protección de los niños, efectivamente este es un programa del ICBF del cual ellos tenían que ejercer vigilancia y control de manera permanente y las encargadas de ejercer estas funciones en cabeza del ICBF eran madres comunitarias, motivo por el cual el ICBF debía verificar de manera continua y frecuente, que las madres comunitarias estuvieran haciendo bien sus labores y que no estuvieran afectando la niñez, igualmente, se mencionó por parte de la demandante que cualquier permiso debía pedirlo al ICBF, siendo posible identificar que el ICBF fungía como empleador.

Por último, resalta que el elemento de la prestación personal del servicio quedó plenamente probado, por lo que solicita se revoque la sentencia y en su lugar se reconozca el contrato realidad que existe entre el ICBF y la demandante entre el 29 de abril de 1987 hasta el 31 de diciembre de 2013.

## **1.5. ALEGATOS EN SEGUNDA INSTANCIA**

Dentro de la oportunidad procesal, el apoderado de la demandante reitera que conforme a las pruebas allegadas se acreditaron todos los requisitos establecidos en el Código Sustantivo del Trabajo para decretar la existencia del contrato de trabajo, señalando que, el a quo debía analizar no solo los aspectos sustanciales de la relación laboral, sino también el estatus de la demandante al interior de la sociedad, quien es una mujer de la tercera edad, que se dedicó toda su vida

productiva al servicio de los Hogares Comunitarios de Bienestar Familiar, no contando hoy con una pensión, ni con un mínimo vital con el cual asegurar su subsistencia, máxime que, por su avanzada edad y la carencia de los recursos económicos para ello, se encuentra imposibilitada para cotizar al sistema general de pensiones, por lo que reitera la solicitud de revocatoria del fallo proferido en primera instancia, y en su lugar, se condene a las demandadas a todas las pretensiones incoadas en la demanda.

El apoderado del ICBF, solicita se confirme la sentencia de primera instancia, teniendo en cuenta que la demandante no logró la acreditación de los elementos esenciales del contrato de trabajo con el ICBF y como madre comunitaria, destacando que el asunto ya fue resuelto por la Corte Constitucional mediante sentencia SU 079 de 2018 y SU 273 de 2019,

En igual sentido, el apoderado de la Fundación las Golondrinas, solicita se confirme la sentencia, por cuanto no se acreditaron los elementos que permitieran dar cuenta que en los periodos referidos por la parte actora, se presentara la concurrencia de los elementos para determinar la existencia de la relación laboral, contrario a ello, se demostró que el servicio que desarrollaba la demandante, nunca se hizo bajo la constante y permanente subordinación del ICBF, por lo que no podría establecerse una relación laboral desde el año 1987.

## **2. CONSIDERACIONES**

### **2.1 COMPETENCIA DE LA SALA**

Inicialmente, debe advertirse que la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, entendiendo que las partes quedaron conformes con lo resuelto de más; de conformidad con el art 57 de la Ley 2ª de



1984; los artículos 10 y 35 de la Ley 712 de 2001, que modificaron los artículos 15 y 66A del C.P.L y de la S.S., respectivamente.

## **2.2.- HECHOS ESTABLECIDOS EN EL TRÁMITE DE LA INSTANCIA**

Quedaron acreditados en el trámite del proceso y no son objeto de controversia los siguientes hechos:

-Que la señora María Bertilda Romero de Jaramillo suscribió tres contratos de trabajo a término fijo con la Fundación las Golondrinas, como auxiliar de cuidado, con fechas de inicio 1º de febrero de 2014, 16 de febrero de 2015 y 4 de febrero de 2016, tal y como se desprende de los documentos obrantes a folios 42 a 51 del anexo 02 del expediente digital.

-Que señora María Bertilda Romero de Jaramillo, prestó sus servicios como madre comunitaria dentro del programa del ICBF de atención a la infancia.

## **2.3. PROBLEMAS JURIDICOS**

Debe la Sala determinar

¿Es procedente revocar la sentencia proferida por el Juez Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín, por medio de la cual se absolvió a las demandadas de todas las pretensiones impetradas por la actora, verificando para tal fin, si entre la señora María Bertilda Romero de Jaramillo y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, existió una relación de carácter laboral entre el 29 de abril de 1987 y el 15 de mayo de 2016, en caso afirmativo, si tienen vocación de prosperidad las súplicas invocadas en la demanda, evento en el cual deberá establecerse la responsabilidad de la llamada en garantía, en el pago de las eventuales condenas?

## 2.4. TESIS

El problema jurídico planteado se resuelve bajo la tesis según la cual la activa no logró demostrar la existencia de una relación laboral con el ICFB, en tanto no se acreditan los elementos propios del contrato de trabajo, como lo son la subordinación y remuneración, en consecuencia, la sentencia debe ser CONFIRMADA.

## 2.5. PREMISAS NORMATIVAS

### *El contrato realidad*

El concepto de contrato realidad tiene fundamento en el principio constitucional de primacía de la realidad sobre las formas que eligen las partes en las relaciones de trabajo, consagrado en el artículo 53 de la Carta Política, de donde se concluye que con independencia de la denominación del contrato, lo que determina el surgimiento de los derechos mínimos e irrenunciables del trabajador, lo es la confluencia de los tres elementos que definen el contrato de trabajo, establecidos en el artículo 23 del Código Sustantivo de Trabajo.

Conforme a la citada norma, son tres los elementos que permiten la configuración de un contrato de trabajo, el primero, la actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo; el segundo, la continua subordinación o dependencia del trabajador respecto del patrono, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes en cualquier momento en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo e imponerle reglamentos, lo cual debe mantenerse por todo el tiempo o duración del contrato y el tercer elemento, el salario como retribución del servicio.

El artículo 24 ibídem, modificado por el artículo 2 de la Ley 50 de 1990, consagra una presunción legal del elemento subordinación, una vez acreditada la prestación personal del servicio:

*“ARTICULO 24. PRESUNCIÓN. Modificado por el art. 2, Ley 50 de 1990. Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo.”*

En desarrollo de tal presunción, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha estructurado una línea jurisprudencial pacífica y uniforme, en torno a cómo se distribuyen las responsabilidades probatorias entre el empleador y el trabajador, criterio expuesto entre otras, en las sentencias SL39259 del 17 de abril de 2013, SL4027 del 08 de marzo de 2017 y más recientemente en sentencia SL 2295 del 24 de mayo de 2022, así:

*“Lo anterior significa, que al actor le basta con probar la prestación o la actividad personal, para que se presuma el contrato de trabajo y es a la empleadora a quien le corresponde desvirtuar dicha presunción con la que quedó beneficiado el operario.”*

Ahora bien, el trabajo humano, en todas sus formas, goza de la especial protección del Estado (artículo 25 de la Constitución Política), pero los principios que gobiernan el derecho sustantivo laboral, no son aplicables a aquellos trabajos que están por fuera del escenario de subordinación, como ocurre frente a contratos de carácter civil o comercial.

## **2.6. CASO CONCRETO**

En el asunto sometido a estudio de la Sala, solicita la actora se declare la existencia de un contrato laboral en virtud del principio de la realidad sobre las formas, en el cual fungió como verdadero empleador el ICBF y se declare que tanto la Asociación de Padres de Hogares de Bienestar Estrella de Oriente, como la Fundación las Golondrinas, fungieron como simples intermediarios, no existiendo controversia alguna en relación a la prestación personal del servicio por parte de la señora María Bertilda Romero de Jaramillo, como madre comunitaria.

Sostiene vehementemente la activa tanto en la sustentación del recurso de alzada, como en los alegatos presentados ante esta instancia, que al interior del proceso se logró acreditar la configuración de los elementos esenciales del contrato de trabajo y en virtud de ello, pretende se revoque la sentencia de primera instancia, consideración que, a juicio de esta Colegiatura, carece de todo respaldo probatorio y dista de la realidad acreditada en el plenario, conforme se pasa a exponer.

En primer lugar, debe indicarse que, del interrogatorio de parte rendido por la actora, es posible deducir prueba de confesión, en aspectos como el pago de salarios por parte de Estrella de Oriente y la Fundación las Golondrinas, dado que reconoció que la supervisión de sus labor era ejercida por la Fundación, afirmó que cuando necesitaba un permiso debía pedirselo a la coordinadora, señora Jeiner, y aunque de manera confusa señala que Jeiner era coordinadora de Bienestar Familiar, posteriormente reconoce que esta trabajaba para la Fundación las Golondrinas, señalando a Jeiner como su jefa en las Golondrinas, refirió que no recibió llamado de atención alguno por parte del ICBF, que quizás el único problema que tuvo fue en las Golondrinas, con un señor Camilo que era de Bienestar Social y que prácticamente se vio en la necesidad de renunciar por la insistencia de Jeiner.

En segundo lugar, con relación a la prueba testimonial allegada, se encuentra que se recibió la declaración de las señoras María Soledad Goez y Rosa Ninfa Usuga, la primera manifestó que conoció a la demandante en el año 1987 cuando ingresó a su hijo a la guardería en la cual estuvo la demandante, sin conocer hasta que fecha estuvo allí la actora, manifestando que en esa época la directora del jardín era doña Rosalba y doña Margarita, quienes aduce trabajaban en Bienestar Familiar, explicando que eso era lo que decía la gente, pero no lo puede asegurar, refirió no conocer quien le pagaba a la demandante la remuneración, que se imagina que Bienestar Familiar, que la demandante posteriormente pasó al jardín en Carpinelo, pero que no lo conoce y no sabe nada de lo que haya pasado allá, no sabe quién era el jefe de la demandante y se imagina que ella trabajaba con

niños y que no sabe si la demandante celebró contratos con la Asociación de Padres Estrella de Oriente.

Por su parte la deponente Rosa Ninfa Usuga, indicó que conoce a la demandante del hogar infantil en la sede de Carambolas, porque allí comenzaron sus hijos, que ese hogar ya no existe y a la demandante se la llevaron a trabajar al hogar Las Golondrinas, Buen Comienzo, y ya no supo más, que solo da fe hasta donde la actora le cuidó a sus hijos, expresando que no llegó a visitar las Golondrinas, que no sabe hasta cuándo trabajó la demandante, ni porque dejó de laborar, señaló no saber si a la accionante le daban órdenes, no sabe quién le pagaba, que en su caso cuando llevaba sus hijos al hogar infantil, no tuvo que surtir ningún trámite con el ICBF e indicó que eran los padres y la comunicad quien vigilaba que la demandante cumpliera sus funciones.

Del análisis de los dichos de las declarantes, es claro que contrario a los sostenido por la recurrente, las mismas no aportan elemento de convicción alguno que respalde las aspiraciones de la demandante, ello por cuanto desconocen las particularidades de los contratos que hubiera celebrado la demandante, con quien los celebró, quien le impartía ordenes, quien le realizaba pagos, dando fe únicamente de la prestación personal del servicio, y esto, solo respecto de los años iniciales, hecho que como se consignó anteriormente, no es objeto de discusión.

En tercer lugar, a juicio de la Sala, la prueba documental allegada por la pretensora, consistente en los formatos de verificación de estándares para hogares comunitarios y actas de visita, no resulta suficientes para predicar subordinación alguna por parte del ICBF, siendo clara la necesidad de que la entidad realice dichos procesos de verificación a fin de garantizar el buen desarrollo y coordinación de los programas en favor de la infancia.

Recordando que la Corte Constitucional en sentencia SU273 de 2019, determinó la inexistencia de un vínculo laboral entre el ICBF y las madres comunitarias,

señalando: “ *En consecuencia, y en reiteración de la Sentencia SU-079 de 2018, no es posible derivar la existencia de una relación laboral entre las accionantes y el ICBF, toda vez que, si bien se puede afirmar que las labores fueron desarrolladas por cada una de ellas, no existió una relación de continua subordinación y dependencia, al tratarse de una contribución voluntaria y solidaria con los menores de su comunidad y la beca no constituye una remuneración, al estar destinada a la alimentación de los niños y niñas a su cuidado, compra de útiles y elementos de aseo, entre otros.*”

En armonía con lo anterior que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en procesos de similares contornos al presente, ha concluido que, atendiendo a la naturaleza jurídica del ICBF, los servidores de dicha institución son por regla general empleados públicos y excepcionalmente trabajadores oficiales, no siendo posible declarar la existencia de un contrato de trabajo atendiendo las labores sociales desarrolladas por las madres comunitarias, consúltase al respecto las sentencias SL4574 de 2021, SL2371 de 2021, SL2069 de 2021, SL1888 de 2021 y SL5090 de 2020.

Y en igual sentido el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria laboral, ha reiterado que la vinculación de las madres comunitarias que participan en los programas de hogares de bienestar, debe ser entendida como una contribución voluntaria, la cual no implica relación laboral, véase sentencias SL3936 de 2020 y SL 2069 de 2021.

De otra parte, en cuanto el contrato de aportes celebrado por el ICBF y las codemandadas, el Consejo de Estado, ha puntualizado que “ *Las personas naturales que desempeñan actividades de dirección u organización de los Hogares Infantiles, únicamente tienen relación laboral con las entidades encargadas de su administración y manejo, las cuales generalmente son organizaciones comunitarias no gubernamentales sin ánimo de lucro, o de naturaleza semejante. Además de las personas vinculadas por contrato laboral, hay otras cuya contribución del trabajo es voluntaria, en cumplimiento de las responsabilidades solidarias de*

*protección a la niñez y por tanto no tienen carácter de trabajadores.”* (Sala de Consulta y Servicio Civil. Radicación 907 del 2 de diciembre de 1996).

Conforme a lo anterior, resulta procedente confirmar la decisión apelada. Se abstendrá la Sala de imponer condena en costas a la accionante, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 8° del artículo 365 del Código General del Proceso.

### 3. DECISION

En consonancia con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

#### FALLA:

1. Se **CONFIRMA** la sentencia objeto de apelación proferida el 7 de diciembre de 2022, por el Juzgado veintiuno Laboral del Circuito de Medellín en el proceso ordinario promovido por la señora MARIA BERTILDA ROMERO DE JARAMILLO en contra del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, la ASOCIACIÓN DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR ESTRELLA DE ORIENTE, la FUNDACIÓN LAS GOLONDRINAS y COLPENSIONES.

2. Sin **COSTAS** en esta instancia.

3. Se ordena la devolución del expediente digital con las actuaciones cumplidas en esta instancia al Juzgado de origen

El fallo anterior será notificado a las partes por Edicto de conformidad con el numeral 3° literal d) del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y la


Seguridad Social y el auto AL 2550 del 23 de junio de 2021, proferido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados,



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE

CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO